

TRIBUNA ECONOMÍA El autor denuncia que la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado se ha convertido en un mercadeo político que ha dejado de lado la búsqueda del equilibrio y la cohesión territorial

Las cuentas de un maltrato intolerable

MANUEL MIÑÉS MUÑOZ

EL ANTEPROYECTO de los Presupuestos del Estado, lejos de perseguir el equilibrio y la cohesión territorial y buscar la eficiencia en la asignación de los recursos públicos entre comunidades, se ha convertido en un trilerismo político y mercado persa, en donde se consiguen apoyos a cambio de inversiones territorializadas. No estamos ante una compra de votos fraudulenta. Ahora se negocian los Presupuestos y sus correspondientes partidas de inversión con «luz y taquígrafos» en los pasillos y despachos del Congreso. ¡Estamos ante una compra de votos legal, mas no ética!

Ante una inversión regionalizada de 8.597 millones, a la Comunidad Valenciana sólo se le asignan 598,18. Equivale al 6,9% del total nacional, lejos del peso de nuestra población, que representa el 10,60% nacional, y la riqueza regional, que con 20.586 euros per cápita se sitúa muy por debajo de la media (23.290).

¡No somos el Levante feliz! Necesitamos inversiones en Infraestructuras para apoyar a nuestro tejido empresarial, relanzar nuestra industria, agricultura y manufacturas exportadoras; logística, intermodalidad y movilidad para nuestros ciudadanos y potenciales turistas. Somos, no hay que ocultarlo, la duodécima región en renta/cápita y en el índice Europeo de Competitividad Regional (RCI) ocupamos el puesto 184 de 263 y el séptimo de España.

A pesar de estas «debilidades», si se cumplieran los Presupuestos de 2017 alcanzaríamos un déficit de inversiones productivas respecto a la media española de 7.447 millones en el periodo 2000-2017. El presidente Rajoy sería responsable de 2.300, que ascenderían a 3.100 millones si ajustamos los cálculos a nuestra población. Esto nos hubiera proporcionado unos 130.000 empleos directos. Los presupuestos e inversiones del Gobierno central, tras enfermar con Zapatero, han «entrado en coma con Rajoy».

Cabe recordar que en 2016 nos asignaron 879,23 millones para infraestructuras (de los que 230 provenían de inversiones programadas e incumplidas en 2015) pero en julio, en aplicación de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y Déficit excesivo, Montoro optó por la no disponibilidad financiera de créditos por importe de 2.000 millones. En consecuencia, la liquidación de los 879,23 millones, según nuestros análisis, apenas se ha llegado realmente a los 415 millones de inversión. ¿Algún representante político valenciano ha protestado en las Cortes, en el Con-

greso, ante el salvaje recorte del 53% o es que ni siquiera se han enterado? Se nos dirá que la culpa es de Bruselas o que al ser un Gobierno en funciones no pudo invertir. ¡Falso de toda falsedad! ¡Haber reducido los gastos de estructura y aumentado las inversiones productivas!

¿Qué pasará en los Presupuestos de 2017? Si se aprueban como pronto a finales de mayo, y los «inflados ingresos» decrecen (Impuesto de Sociedades, IVA, ingresos por cuotas Seguridad Social) o bien la factura de petróleo sube, o los 35.000 millones en intereses de la deuda repuntan, lo más cómodo y rápido será reducir nuevamente la inversión pública a lo largo del año para cumplir con Europa. Por ello afirmo, con los condicionantes expuestos, que ojalá invierta el Gobierno central en lo que resta del ejercicio los 598,18 millones asignados. ¡Desgraciadamente pienso que no lo harán! Y eso que unos 450 millones ya provienen de incumplimientos de 2016.

Después de tantas cifras, anualidades, desgloses y proyectos, sólo algunas puntualizaciones:

A título de ejemplo, la V-21 entre el barranco del Cairaixet-Valencia se cifró en 19,9 millones. En 2016 se incluyó en los Presupuestos con una aportación de un millón de euros pero no se licitó. Aparece nuevamente este año, pero con tan sólo 100.000 euros de inversión.

Sucede algo similar con la duplicación de la N-332 para acceder al aeropuerto de Alicante. Con un coste de 35,1 millones, las cuentas de 2016 recogieron 2,3. Tampoco se licitó el proyecto que ahora aparece nuevamente con una anualidad de 200.000 euros. Y eso que los turistas (12,3 millones de pasajeros en 2016) tardan menos en volar desde Manchester que en llegar desde el aeropuerto a Benidorm.

Nada recogen de la ampliación del bypass con un tráfico medio de 96.600 vehículos al día y elevada siniestralidad, nada de Cercanías, nada de la prolongación del túnel de Serrería, nada del eje pasante y Estación Central soterrada.



ALBERTO DI LOLLI

En fin, seamos prácticos. Pensemos ya en los Presupuestos de 2018 que comenzarán a negociarse en verano de 2017 y actuemos con pragmatismo. Y, si es menester, olvidemos el Pacte del Botànic. ¿Sería posible que nuestros diputados y senadores del PSPV, Compromís, Ciudadanos y PPCV ofrezcan el apoyo a Rajoy (no les importe taparse la nariz) en las cuentas del año próximo a cambio de consolidar los convenios e inversiones estratégicas paralizadas que necesita la Comunidad? A la vez desactivaríamos el trilerismo político de vascos, canarios y catalanes que «históricamente» con sus apoyos a los Presupuestos siempre se están alzando con «el santo y la limosna», en detrimento de otras comunidades.

Manuel Miñés Muñoz es director-gerente de la Cámara de Contratistas de la Comunidad Valenciana - CCCV.